



Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020)

JUEZ	:	ÁLVARO CARREÑO VELANDIA
REF. EXPEDIENTE	:	110013343064-2020-00055-00
ACCIONANTE	:	JESÚS DAVID CARRILLO ARANDA
ACCIONADO	:	EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD

**ACCIÓN DE TUTELA**  
**SENTENCIA No. 19**

**I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO**

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por JESÚS DAVID CARRILLO ARANDA el 28 de febrero de 2020 en contra del Ejército Nacional – Dirección de Sanidad, solicitando la protección de sus derechos fundamentales de petición, seguridad social integral y debido proceso.

**II. ANTECEDENTES**

**2.1. HECHOS Y PRETENSIONES**

En su escrito el accionante expuso:

- . Prestó su servicio militar en el Batallón de Infantería de Selva No. 50 en la ciudad de Leticia desde el 10 de mayo de 2017 hasta el 10 de mayo de 2018.
- . El día 10 de mayo sufrió una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano derecha que le ha conllevado complicaciones motrices.
- . El 19 de agosto de 2017 informa a su superior sobre el accidente sufrido y el mismo día el superior informa al comandante del primer pelotón sobre lo sucedido.
- . Fue retirado del servicio por haber cumplido el tiempo pero jamás le realizaron la junta médico laboral de retiro pese a haber informado del accidente y aportado la historia clínica.

-. Solo hasta mediado de abril de 2019 llegaron a su poder los respectivos informativos No. 061339 de 1 de abril de ese mismo año y envío de hoja de seguridad I.A.L., de 2 de abril de 2019; los mismos fueron radicados en la DISAN en mayo de 2019, a fin de que esa Dirección procediera a convocar la Junta Médico Laboral de Retiro.

-. Pasado el tiempo y al ver que no se le realizaba la Junta, el día 2 de octubre de 2019 elevó un derecho de petición solicitando se le practicara la respectiva Junta Médico Laboral de Retiro, anexando la copia de la historia clínica, los informativos por lesiones, formato de la hoja de seguridad, copia de la cédula y libreta.

-. El 23 de octubre de 2019 recibió por correo la respuesta en donde se le comunicó que fue él quien dejó vencer los términos para lograr la calificación de la junta médica de retiro, ya que han transcurrido 17 meses posteriores a su retiro sin que haya iniciado el proceso de junta médica.

-. La anterior afirmación no es cierta teniendo en cuenta que para poder iniciar el proceso y solicitar la convocatoria de la junta médica de retiro se hace necesario que el soldado cuente previamente con los respectivos informativos, a los cuales tuvo acceso a mediados de abril de 2019 por lo cual los radicó en mayo de 2019.

Con fundamento en los mencionados hechos el accionante solicitó tutelar sus derechos al debido proceso, petición y seguridad social integral y conminar a la entidad accionada a realizar con base en la historia clínica la junta médica de retiro.

## **2.2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA**

Mediante auto de fecha 2 de marzo de 2020, se admitió la demanda y se ordenó notificar al Brigadier General Marco Vinicio Mayorga Niño Director de Sanidad del Ejército Nacional o quien hiciera sus veces.

Decisión que fue notificada a las partes tal como consta a folios 17 a 24 del plenario.

## **2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Hasta el momento de emisión de la presente providencia la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en cabeza del Brigadier General Marco Vinicio Mayorga Niño, no ha dado contestación.

## **2.4. ELEMENTOS PROBATORIOS**

Con el escrito de tutela, el accionante aportó:

- . Copia de Informes de acontecimiento de fecha 19 de agosto de 2017 (fls.6-7).
- . Copia del Informativo Administrativo por Lesiones Extemporáneo No. 002 de 1 de abril de 2019 (fl.8).
- . Copia del oficio 01538 envió formato hoja de seguridad (fl.9).
- . Copia del derecho de petición con radicado 2 de octubre de 2019 (fl.10).
- . Copia del radicado No. 20193381962171 de fecha 7 de octubre de 2019 (fls.11-12).

## **III. CONSIDERACIONES**

### **3.1. Competencia**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017, este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto.

### **3.2. Procedibilidad – aspectos generales**

En el presente asunto, la acción resulta idónea, habida cuenta que la parte demandante invocó la protección de sus derechos fundamentales de petición, seguridad social integral y debido proceso, los que según aduce, han sido transgredidos por la entidad demandada al no emitir la autorización para iniciar la valoración de Junta Médica de Retiro. Derechos respecto de los cuales no existe otro mecanismo de defensa judicial eficaz.

### **3.3. Problema jurídico**

Se concreta en establecer si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad ha vulnerado los derechos fundamentales de petición, seguridad social integral y debido proceso de JESÚS DAVID CARRILLO ARANDA, al no convocarlo a Junta Médica de Retiro.



Para resolver el problema jurídico planteado, el Despacho tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

### 3.3.1. De la junta médico laboral militar

El Decreto 1796 de 2000, establece en su artículo 8º, lo siguiente:

*"ARTICULO 8. EXÁMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado. Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación."*

Por su parte el artículo 15, señala como funciones de la Junta Médico Laboral Militar, las siguientes:

1. Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas.
2. Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite.
3. Determinar la disminución de la capacidad psicofísica.
4. Calificar la enfermedad según sea profesional o común.
5. Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones.
6. Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.

Es decir, que dicha valoración tiene como objetivo determinar las lesiones o afecciones que generen disminución de la capacidad psicofísica, a efectos de determinar la disminución de la capacidad laboral una vez el militar es retirado del servicio activo, y las prestaciones económicas a las que eventualmente tendría derecho.

Teniendo como fundamento lo consagrado en las normas señaladas, encuentra el Despacho que lo primero que se debe dilucidar es el **requisito de inmediatez de la solicitud de amparo**, pues el accionante fue retirado del servicio activo, según la respuesta de la Dirección de Sanidad a su petición (fl.11), el **31 de mayo de 2018**, luego los 2 meses con los que contaba el interesado para adelantar las gestiones necesarias para realizar los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, vencían en principio el 31 de julio de 2018, mientras que la

solicitud de amparo se elevó inicialmente el 28 de febrero de 2020, es decir, **1 año y medio después.**

Sin embargo, en la medida que el asunto es de raigambre constitucional por cuanto se encuentran comprometidos los derechos fundamentales acusados como violentados por el actor, el Despacho procederá a analizar la línea jurisprudencial sentada por la Corte Constitucional en estos eventos, con miras a establecer si la acción es o no oportuna.

Al respecto, debe referirse lo señalado por la jurisprudencia constitucional<sup>1</sup>, frente al principio de inmediatez:

*"(...) el principio de inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que su interposición debe ser oportuna y razonable con relación a la ocurrencia de los hechos que originaron la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados. La petición ha de ser presentada en un tiempo cercano a la ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Si se limitara la presentación de la demanda de amparo constitucional, se afectaría el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela, y se desvirtuaría su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos."*

Frente a la oportunidad de la solicitud de tutela, para la práctica de la Junta Medico Laboral de Retiro, ha señalado la Corte Constitucional, lo siguiente:

*"Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado ciertas condiciones, no taxativas, por las cuales resulta admisible la dilación en la interposición de la acción de tutela. **La primera de ellas es que se produzca una vulneración que resulte permanente en el tiempo.** Así, a pesar de que el hecho que originó la vulneración sea lejano en el tiempo, la situación desfavorable del tutelante continúa y se verifica actualmente[12]. **La segunda condición es la especial situación de la persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales. Su particular situación debe hacer desproporcionado "el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros"**"<sup>2</sup>*

En otra oportunidad, la Corte señaló:

*"(...) no se pueden desconocer las especiales circunstancias del caso objeto de revisión, de las cuales se desprenden las siguientes afirmaciones:*

*(i) el estado de salud del actor aún se encuentra en deterioro a causa de las enfermedades suscitadas durante la prestación del servicio militar.*

---

<sup>1</sup> Ver Sentencia T-332 de 1° de junio de 2015. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS

<sup>2</sup> Ver sentencia T-590 de 2014

(ii) el accionante ha sido diligente, en la medida en que sus posibilidades se lo han permitido, acudiendo a las diferentes autoridades de salud adscritas a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional en procura de acceder a los servicios médicos requeridos... Lo anterior demuestra, por parte del accionante, la realización de actividades tendientes a que le fuera practicado el tratamiento requerido durante todo el año 2012, registrándose la última actuación en este sentido en febrero diecinueve (19) de dos mil trece (2013) – respuesta al derecho de petición- es decir, dos meses antes de interponer la acción de tutela, por lo que en el presente caso se satisfacen las exigencias propias del requisito de inmediatez.”<sup>3</sup>

Pues bien, del escrito de tutela se observa que el accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales de petición, seguridad social integral y debido proceso, vulnerados en su sentir por la entidad accionada, al no convocarlo a Junta Médica de Retiro, tal como lo solicitó en petición obrante a folio 10.

A la fecha de la presente providencia, se encuentra acreditado que la Dirección de Sanidad dio respuesta a la petición formulada por el actor indicándole que: “...teniendo en cuenta que su fecha de retiro data 31 de mayo del año 2018, situación que se hizo efectiva a través de la Disposición No. 1530, usted dejó fenecer el término establecido para realizar sus exámenes de retiro...de ahí que no es posible acceder de manera positiva a su solicitud de realizar Junta Médico Laboral, toda vez que usted no cumplió con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, no se acercó en el término establecido a diligenciar su ficha médica de retiro, esto es, dentro de los dos meses siguientes a su fecha de licenciamiento.

Es de mencionar que **la calificación de Junta Médica de Retiro demanda del usuario distintas acciones, como lo es acercarse en el término establecido a realizarse su Ficha Médica Unificada de la que debe solicitar calificar** para que le sean ordenados los conceptos médicos necesarios, los cuales debe practicarse en un término prudencial para la realización de la Junta Médica conforme lo establece el art. 8 Decreto 1796 de 2000...”

En virtud de lo expuesto, se hace imperioso analizar si en el caso bajo estudio, se presentan las circunstancias excepcionales, por las cuales sería procedente la presente tutela, frente al principio de inmediatez.

---

<sup>3</sup> Ver sentencia T-737 de 2013



Respecto al hecho consistente en que la vulneración resulte permanente en el tiempo por cuanto la situación desfavorable del tutelante continúa y se verifica actualmente, el Despacho, de las pruebas aportadas por el accionante, no encuentra acreditada la situación de vulnerabilidad del actor<sup>4</sup>.

Frente a la segunda condición consistente en que la especial situación de la persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, impida adjudicársele la carga de acudir a un juez; por su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; debe decir el Despacho que dicha circunstancia se encuentra demostrada, dado que se puso al accionante en una situación irresistible a partir de la cual no podía iniciar el trámite ni hacer las solicitudes respectivas ante la DISAN en aras de iniciar su proceso de junta médico laboral; dicha circunstancia consiste en que solamente hasta después de casi dos años de haber sufrido su lesión (**17 de agosto de 2017**) recibió el informativo administrativo por lesiones No. 002, de fecha **1 de abril de 2019**.

De este modo, no es de recibo la posición esgrimida por la DISAN en su escrito de respuesta al derecho de petición impetrado por el actor, en donde indica que la solicitud del señor Carrillo Aranda es extemporánea, cuando lo extemporáneo fue la gestión de la misma institución militar al expedir con la tardanza indicada el informativo administrativo, dejando al hoy accionante en un limbo por casi dos años. Dicho de otra forma, al accionante no se le puede atribuir la carga de una obligación que correspondía al respectivo Comandante o Jefe, tal como lo establecen los artículos 24 y 25 del Decreto 1796 de 2000, que además indican que dicho documento debe expedirse *"dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del momento en que tenga conocimiento del accidente"*.

Finalmente, frente a las actividades diligentes del accionante a efectos de obtener la práctica de la Junta Médico Laboral, el Despacho observa que el accionante acudió a la entidad, según su decir, en mayo de 2019 (de lo cual no hay evidencia documental) luego de haber recibido el informativo

---

<sup>4</sup> Se aportaron dos informes de acontecimiento de 19 de agosto de 2017; un informativo administrativo por lesiones extemporáneo de 1 de abril de 2019 en que se narran los hechos de agosto de 2017; una copia del oficio 01538 de fecha 2 de abril de 2019; un derecho de petición donde se solicitaba la convocatoria de la junta médica de retiro de fecha 2 de octubre de 2019 con su respectiva respuesta del día 7 de octubre del mismo año.

administrativo por lesiones extemporáneo No. 002 de 1 de abril de 2019, obrando prueba de un derecho de petición radicado el día 2 de octubre. Frente a lo cual, reitera el Despacho, no puede correr a cargo del accionante la demora en la expedición del informativo administrativo, cuando dicha obligación le correspondía al Comandante o Jefe de la unidad militar a la que pertenecía el actor.

En este orden, considera el Despacho que en el presente evento, se satisfacen las exigencias propias del requisito de inmediatez, por cuanto se acreditó de manera adecuada y suficiente que el accionante se encontraba en una especial situación que le impedía acudir a la DISAN oportunamente por cuanto el informativo administrativo por lesiones constituye un requisito previo a la convocatoria.

### **3.4. Caso concreto**

Advertido lo anterior, el Despacho considera que se encuentra probada la vulneración de los derechos del accionante.

En cuanto al derecho de petición, de la evidencia obrante en el expediente es posible concluir que la DISAN emitió una respuesta oportuna a la petición que elevara el accionante, no obstante ser negativa a sus pretensiones.

Respecto al derecho a la seguridad social integral, hay evidencia que la DISAN vulneró dicho derecho al atribuirle la extemporaneidad de la solicitud de convocatoria a junta médica de retiro al hoy accionante, sin considerar que la misma institución militar se demoró casi dos años en emitir el informativo administrativo por lesiones No. 002, documento necesario para adelantar los trámites relacionados con la dicha convocatoria a junta. El Ejército fue negligente en expedir dicho documento y ahora su DISAN no puede ampararse en la extemporaneidad de la petición para negar la activación de los servicios y exámenes médicos necesarios para la convocatoria a la junta médica de retiro.

Finalmente, en cuanto al debido proceso, se concluye que no hay evidencia de vulneración alguna por parte de la DISAN.



En relación con la residencia actual del accionante en el exterior y la petición elevada por su apoderado de conminar a la DISAN que adelante la junta médica de retiro con base en la historia clínica que se allegó oportunamente, el Despacho desestima dicha solicitud, por cuanto el proceso de retiro y la junta médica para este efecto, está claramente reglamentada en el Decreto 1796 de 2000 y el accionante deberá someterse a dicho trámite en los términos y condiciones legalmente establecidos. Así, durante el trámite respectivo, el actor deberá comparecer a la unidad militar que sea necesaria para adelantar la ficha médica unificada y practicarse los exámenes que los galenos determinen.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

#### IV. FALLA:

**PRIMERO: NEGAR** el amparo de los derechos fundamentales de petición y debido proceso invocados por JESÚS DAVID CARRILLO ARANDA de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente fallo.

**SEGUNDO: AMPARAR** el derecho a la seguridad social del accionante por las consideraciones expuestas en la presente providencia.


**TERCERO: ORDENAR** al BG. Marco Vinicio Mayorga Niño en su calidad de Director de Sanidad del Ejército, o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, tome las medidas y disposiciones necesarias e informe por el medio más expedito al actor los trámites que debe adelantar ante la unidad militar pertinente para la convocatoria a su junta médica de retiro.

**CUARTO:** Negar la solicitud hecha por el apoderado del accionante de practicar la junta médica de retiro con base en la historia clínica allegada a la DISAN, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**QUINTO:** Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**SEXTO:** En firme la presente providencia y en el evento en que no fuere impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ÁLVARO CARREÑO VELANDIA**  
Juez

CASZ